Valoración de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y la repercusión que esta pueda tener en los consumidores y en el procedimiento de fijación de precios en base a los costes de producción.

Introducción

El preámbulo de la Ley define la Indexación como una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo a la variación de un índice de precios a lo largo de un periodo.

Desde organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea se ha venido demandando, el de desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos.

Posicionamientos en este sentido, se han reflejado por el Gobierno Central, caso de la disposición adicional octogésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, que determinó ya la desindexación de los contratos el sector público respecto de los índices generales, estableciendo que los contratos relativos a expedientes iniciados después de su entrada en vigor no podrían referenciar su revisión económica a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contuviera, remitiéndose como alternativa a la evolución de los costes.

Del mismo modo, en los últimos acuerdos en materia de empleo y negociación colectiva suscritos desde 2012, los agentes sociales ya habían desvinculado las revisiones salariales del IPC.

Finalmente en abril de 2015, más de un año después de haber sido aprobada por el Gobierno y tramitada ante las cámaras legislativas entraba en vigor la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Contenido de la norma

La propia norma argumenta la desindexación como solución a la problemática de la estabilidad de los precios, así como al peligro de inflación, suponiendo la derogación directa de cualquier vinculación automática de los precios de los servicios afectados al IPC y la sustitución de los índices de referencia generales en dichos precios públicos por el principio de adecuar las revisiones de los mismos a los costes del servicio, evitando potenciales espirales o inercias inflacionistas ligadas a esos efectos retroalimentadores: a precios más altos, mayor IPC y – consecuentemente- salarios más alto, que a su vez propicia el incremento de los precios.

Habiendo eliminado índices de referencia, serán las propias empresas las que indiquen cual ha sido la evolución de tales costes que determinaran la variación de los precios, justificándolos en la evolución de los costes, según el principio de “eficiencia y buena gestión empresarial”.

Como sustitutivo del sistema indexado se crea un nuevo índice de referencia, tanto para contratos del sector público como del sector privado, denominado 'Índice de Garantía de Competitividad', que incorpora un diferencial de inflación de España con la zona euro corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro, y que se limita a un máximo del 2% - objetivo de inflación del BCE- y un suelo del 0%, que conlleva la imposibilidad de una reducción de precios referenciada en el mismo. Este índice se pretende fomentar como referencia también de la contratación privada, de modo que cuando no se pacte explícitamente un régimen de revisión periódica no sea factible actualización alguna y, cuando se pacte dicha actualización sin referencia a un índice concreto, la misma se referencia subsidiariamente en este nuevo índice.

Este aspecto que va a condicionar de una forma directa a los precios públicos que venimos a revisar y que afectará por tanto a bienes y servicios de interés general como puede ser el transporte colectivo, las tarifas de taxis o las tarifas de agua entre otros, siendo éstos servicios de carácter esencial.

Para los contratos de arrendamientos se establece una excepción, ya que, con carácter general, en caso de que no haya un pacto expreso en el contrato, no se aplicará ninguna revisión de rentas, pero se admite que –previo pacto expreso entre las partes- se pueda incorporar un mecanismo de actualización de precios periódico en la medida en que exista una razón económica objetiva para ello, sistema que sólo podrá vincularse a la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas a nivel autonómico del INE o, transitoriamente, al índice de precios de alquiler de la vivienda del IPC a nivel provincial. En este caso, el CES se ha mostrado de acuerdo con que este índice sirva de referencia para los alquileres considerando que, por norma general va a ser menor al IPC al reducirse la merma desde 1999 y establece un mínimo (0%) y un máximo (2%) evitando una pérdida de poder adquisitivo a aquellos ciudadanos que alquilan viviendas y garantizando una mayor seguridad jurídica y económica.

Estos criterios se han ampliado a otros valores monetarios diferentes de los precios, fijados por el sector público, como es el caso de las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros, la valoración de daños en accidentes de tráfico (ahora alterados por el nuevo Baremo) o las sanciones administrativas, elementos que no por su carácter específico deben despreciarse, y cuya finalidad y objeto (resarcitorio, punitivo, coercitivo, etc.) requiere una evolución que impida su minimización en pérdida de eficacia de sus funciones.

Valoración de la norma.

Es oportuno en primer lugar señalar que el escenario inflacionista en el que se plantea la norma se ha invertido, ya que la medida es tomada precisamente cuando el incremento del IPC resulta ser de los más bajos en la historia de este índice como medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población y que ha venido beneficiando a los consumidores actualmente al igual que perjudicándolos en las subidas.

Según datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.

Por otro lado, no podemos obviar que determinados precios de carácter público (La nueva ley afecta a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos) en su calidad de esenciales deben entenderse directamente ligados al concepto del "coste de la vida" siendo por tanto razonable que éstos vengan ligados a índices que vengan a medir el coste real de la vida y no se venga a determinar dentro de criterios de carácter puramente empresarial como el de costes reconocidos o hacerlos depender de principios propios de una buena o mala llevanza del negocio por parte de la propia empresa (principio eficiencia y buena gestión empresarial).

Entendemos que la sociedad debe establecer mecanismos que favorezcan el acceso de los usuarios a determinados bienes, no dejándolo en criterios que pudieran verse delimitados por los intereses comerciales de las distintas empresas, que puede ser legítimo para otro tipo de bienes pero en ningún momento en servicios esenciales (en especial aquellos cuyos precios deben ser controlados por la administración).

No podemos obviar que el papel que ha jugado el IPC como índice referente, se justificaba en garantizar la capacidad de compra a los agentes económicos, quedando determinado por la evolución de los precios de consumo de carácter básico y necesario para el ciudadano, representando por tanto una fotografía mucho más correcta del coste de la vida y que se enfocará mucho mejor a la capacidad adquisitiva que la determinación por costes que plantea la nueva normativa, siendo por tanto un índice no manipulable por los agentes privados.

La vinculación de los contratos a los costes reconocidos de producción, sin duda genera incertidumbre, indefiniciones, dificultad en la mediciones y sobre todo dudas respecto a la capacidad de los órganos de contratación (de carácter público) para controlar y dirigir este sistema que viene a ser mucho más opaco e indefinido que el índice de IPC.

De este modo se introduce, un factor altamente aleatorio en función de elementos de política empresarial, que –por un lado- exceden del propio ámbito propio de decisión de las empresas prestadoras de los mismos, profundizando en intereses propios del mercado liberal y capitalista, con una incidencia directa de aquellos bienes y servicios directamente relacionados con el sector, de tal modo que se pierden los efectos amortiguadores que en tales circunstancias corresponderían a un índice integrado y mucho más transversal, como el actual IPC.

Todo ello, hace necesario la articulación de mecanismos que verifiquen la veracidad de los datos aportados por las empresas en relación con la evolución de dichos costes, así como definir qué gastos empresariales han de ser considerados como tales y por consiguiente, susceptibles de influir en la variación de los precios.

Lo cierto es que en todo caso no habrá una equivalencia directa entre el aumento del poder de adquisición económica de los hogares españoles y las subidas de los costes de los bienes y servicios que pueden venir dados por una mala gestión o por una falta de previsibilidad empresarial, toma de decisiones poco acertadas y en definitiva fuera del poder de control de los agentes sociales.

No debemos obviar que un sistema de fijación de precios por costes reconocidos como el que impera en el sector eléctrico, que más allá de controlar la inflación ha supuesto un crecimiento en España del 70% de la factura eléctrica en los últimos años, además de una fluctuación peligrosa para cualquier economía doméstica, que obviamente viene a afectar directamente al consumo de las familias.

Conclusión

Desde este Consejo, entendemos que con la modificación del sistema, se está dejando en manos de los propios prestadores de los servicios la fijación de los precios finales de los mismos, suponiendo por tanto la introducción de un carácter mercantilista en servicios que son públicos.

No podemos olvidar que en la gran mayoría de las prestaciones, las administraciones deben garantizar el acceso de la ciudadanía a éstas, primando la existencia y accesibilidad por encima de otros criterios que pudiera introducir el sector empresarial dentro de sus costes de producción y que por tanto se trasladaría al precio mermando la accesibilidad.